



Informe Mundial sobre Derechos Humanos de Human Rights Watch 2024

El informe de la ONG internacional Human Rights Watch de 2024 es una revisión anual de los derechos humanos en todo el mundo respecto al año 2023.

Este año estuvo caracterizado por un doble estándar en la selectividad de la defensa de los Derechos Humanos. Muchos gobiernos denunciaron crímenes específicos y mediáticos como los de Israel en Gaza o de Rusia en Ucrania, mientras se minimizan o ignoran otros crímenes como los de China contra los Uigures en Xinjiang, el caso de Sudán y muchos otros países en África. Esta inconsistencia o “miopía” como lo describe el informe, merma la confianza en la universalidad de los derechos humanos y debilita la legitimidad de las leyes internacionales diseñadas para protegerlas.

Asimismo, los gobiernos han priorizado acuerdos comerciales y de seguridad a corto plazo, por encima de los principios de derechos humanos, sacrificando vidas y libertades de las poblaciones vulnerables. El claro ejemplo de ello, es la venta y cesión de armamento de combate tanto en Israel como en otros territorios inundados por la inestabilidad y la violencia, perpetuando injusticias y fortaleciendo regímenes autoritarios.

Esta situación debilita instituciones claves para la protección de los Derechos Humanos como tribunales y medios independientes, cuya labor es garantizar el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales, así como la rendición de cuentas. Los gobiernos, guiados por intereses propios, han demostrado un claro desdén hacia estas instituciones, como se evidencia en la desobediencia a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra líderes como Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu debido a sus crímenes. Por otro lado, el Consejo de Seguridad ha demostrado ser ineficaz al estar estancado debido al poder de veto de las grandes potencias.

Sin embargo, en medio de los conflictos y la violencia se realizaron avances significativos en el ámbito de la protección de los derechos humanos. 83 países, entre ellos 6 de los 8 países principales exportadores de armas (EE.UU, Francia y Alemania), adoptaron una declaración política para reducir el uso de armas explosivas en áreas pobladas, un paso crucial para evitar víctimas civiles. Asimismo, hubo progreso en los derechos para la

comunidad LGBTI y de las personas con discapacidad. En este sentido, Japón aprobó su primera ley contra la discriminación LGTBI, Nepal reconoció los matrimonios igualitarios y México ha avanzado en la plena capacidad legal para personas con discapacidades y despenalizó el aborto a nivel federal.

La Tecnología como Herramienta de Represión

Las plataformas digitales, originalmente concebidas como espacios de libertad, han sido convertidas en herramientas de censura y vigilancia por parte de regímenes autoritarios. Los gobiernos están utilizando leyes vagas para criminalizar opiniones disidentes y restringir el acceso a información crítica.

En el caso de Arabia Saudita, Muhammad al-Ghamdi fue condenado a muerte por publicar opiniones críticas en redes sociales, destacando el uso extremo de la ley antiterrorista para reprimir la libertad de expresión. En Turquía, antes de las elecciones de 2023, el gobierno de Erdogan fortaleció leyes que restringen las redes sociales, dificultando la difusión de información contraria a su narrativa oficial.

Afganistán

La situación de los derechos humanos en Afganistán sigue deteriorándose bajo el régimen talibán, con graves violaciones especialmente dirigidas contra mujeres y niñas. Afganistán se mantiene como el único país donde se prohíbe a las mujeres acceder a la educación secundaria y superior, así como a la mayoría de los empleos. Además, enfrentan

restricciones severas a su libertad de movimiento y expresión. Según Human Rights Watch, estos abusos sistemáticos constituyen un crimen de lesa humanidad por persecución de género. Asimismo, el régimen intensificó la represión contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, con detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, según informes de la ONU.



Afganistán también se encuentra sumido en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 28 millones de personas necesitando ayuda, incluidos 4 millones de personas con desnutrición aguda. La retirada de la mayoría de la asistencia extranjera, la sequía prolongada agravada por el cambio climático y la prohibición a las mujeres de trabajar han empeorado la crisis, dificultando la entrega de ayuda.

China

En el último año, la represión en China ha continuado intensificándose, la "sinización" de religiones y el control social, han afectado gravemente las libertades fundamentales. En Xinjiang, persisten abusos masivos contra uigures y musulmanes túrquicos, catalogados



como crímenes de lesa humanidad, mientras que en el Tíbet y Hong Kong se imponen restricciones severas a las expresiones culturales, religiosas y políticas.



La censura, ejercida a través de leyes, tecnología y control de las plataformas, ha alcanzado niveles alarmantes. Según el informe, el gobierno persigue a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas mediante encarcelamientos, hostigamiento y desapariciones forzadas. En el ámbito de las libertades religiosas, las autoridades han intensificado el control estatal, cerrando mezquitas, reprimiendo congregaciones no oficiales y promoviendo una versión ideológica del cristianismo y el islam alineada con el Partido Comunista.

Mientras tanto, la libertad de expresión sigue siendo restringida, con periodistas y manifestantes enfrentando penas de prisión o censura por desafiar las narrativas oficiales. En este contexto, la economía en desaceleración y el control social férreo han alimentado un creciente descontento que, aunque reprimido, continua como señal de resistencia.

Estados Unidos

En 2023, Estados Unidos enfrentó numerosos desafíos en derechos humanos. En el ámbito interno, persistieron problemas de racismo, desigualdad económica y justicia penal. La pobreza aumentó tras el fin de un programa de crédito tributario, y la brecha de riqueza racial se mantuvo elevada, afectando especialmente a comunidades de color e hispanas. La tasa de encarcelamiento también creció, con una desproporcionada representación de personas de color en prisión, mientras que el acceso al aborto y los derechos de la comunidad LGBT se vieron restringidos en muchos estados. Asimismo, las políticas de inmigración endurecieron las condiciones para solicitantes de asilo, enfrentándolos a mayores riesgos.



El acceso desigual a la atención médica continuó siendo un problema, particularmente para mujeres de color. Por otro lado, la democracia enfrentó retos y avances, con esfuerzos por proteger el derecho al voto y decisiones judiciales significativas contra la discriminación racial en elecciones. Sin embargo, leyes estatales que restringen debates escolares y dificultan el voto debilitaron la participación cívica.

En política exterior, EE.UU. destacó por sancionar violaciones a los derechos humanos y apoyar en el caso de Ucrania, aunque contradujo sus principios al proporcionar asistencia militar a Estados que cometen abusos, como en el caso de Israel contra Palestina. A nivel climático, a pesar de los esfuerzos por incorporar justicia ambiental en sus políticas, el país sigue siendo el mayor productor de petróleo y gas, exacerbando la crisis climática y sus efectos desproporcionados sobre comunidades vulnerables.

Italia

Italia intensificó políticas migratorias restrictivas, dificultando rescates en el Mediterráneo y limitando derechos de asilo mediante nuevas leyes que endurecen la protección humanitaria y aumentan la detención previa a deportaciones. Acuerdos con países como Libia y Albania, criticados por organismos internacionales, consolidaron la externalización del control migratorio, mientras que la aglomeración en centros de recepción evidenció fallas en la gestión de llegadas, que se duplicaron respecto a 2022. Estas políticas desafiaron el cumplimiento de normas de derechos humanos y enfrentaron objeciones legales dentro y fuera del país.

El racismo estructural y la discriminación contra comunidades vulnerables, especialmente los Roma y personas de ascendencia africana, siguieron siendo problemáticos, junto con un aumento de la pobreza absoluta que afecta principalmente a inmigrantes. La eliminación de programas clave de asistencia social empeoró la

desigualdad, mientras que las mujeres enfrentaron altos niveles de violencia de género, con respuestas estatales consideradas insuficientes. En cuanto a derechos LGBTI+, Italia retrocedió en el reconocimiento de familias homoparentales y mantuvo una baja posición en el ranking europeo de respeto a estos derechos. Además, la sobrepoblación carcelaria y restricciones a organizaciones civiles plantearon preocupaciones sobre el estado de derecho y la protección de derechos fundamentales.

Nicaragua

El gobierno de Daniel Ortega continuó reprimiendo toda forma de disidencia y aislando a Nicaragua en el ámbito internacional. A través de medidas como el cierre de medios de comunicación, ONGs y universidades, ha restringido las libertades de expresión, asociación y el derecho a la educación. Además, persiste la persecución a críticos del gobierno, incluyendo 81 personas detenidas, y la confiscación de nacionalidades a opositores, dejándolos en condición de apatridia.



Por otro lado, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando

discriminación y violencia, especialmente por parte de colonos ilegales que invaden sus territorios, causando desplazamientos forzados y asesinatos. El gobierno también mantiene la impunidad por la represión de las protestas de 2018, en las que murieron más de 300 personas y cientos fueron torturadas. En cuanto a los derechos de las mujeres, persiste la prohibición total del aborto y un aumento en la violencia de género, sin que el gobierno proporcione cifras oficiales sobre femicidios. Así, más de 260,000 nicaragüenses se han visto forzados a emigrar debido a la persecución política y la falta de oportunidades.

República Democrática del Congo

Los conflictos armados continúan afectando gravemente a la población civil, especialmente en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, donde la violencia de grupos armados como el M23 ha empeorado la situación humanitaria. Más de 7 millones de personas fueron desplazadas dentro del país, lo que representa la mayor cifra de desplazados internos en África. Además, las fuerzas gubernamentales también estuvieron involucradas en abusos contra civiles, incluyendo ejecuciones y represión violenta de manifestaciones. A pesar de los esfuerzos del presidente Félix Tshisekedi por promover reformas, no se han logrado avances significativos para frenar la violencia, la corrupción y la impunidad que han marcado al país durante décadas.



Se ha intensificado la represión contra periodistas, activistas y miembros de la oposición, arrestando a varios líderes y miembros de partidos políticos. La represión de manifestaciones pacíficas ha resultado en la muerte de decenas de personas, como ocurrió en Goma en agosto de 2023. A nivel internacional, Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a varios individuos involucrados en la financiación de grupos armados abusivos, y el gobierno congoleño ha solicitado la retirada acelerada de la misión de paz de la ONU (MONUSCO), criticando su ineficacia frente a los conflictos armados.

Conclusiones

A más de 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios fundamentales que defiende siguen siendo esenciales para la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos significativos a través de todo el mundo debido a la inacción de algunos gobiernos y a la politización de temas clave.

Cada vez que estos principios son ignorados, las personas más vulnerables son las que



sufren las consecuencias, viéndose afectadas en su libertad, salud e incluso perdiendo la vida. A pesar de las críticas que se le puedan hacer a este marco de protección de derechos humanos, sigue siendo una herramienta crucial para enfrentar los desafíos globales y construir un futuro más equitativo.

Es esencial que la comunidad internacional actúe con urgencia y coherencia para proteger los derechos humanos y garantizar justicia para todas las personas cuyos derechos han sido vulnerados, independientemente de su origen, género o situación. La responsabilidad recae no solo en los gobiernos, sino en toda la sociedad internacional, que debe colaborar

para asegurar que los derechos y dignidad humana sean respetados y defendidos en todo momento. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un compromiso que debe ser renovado y fortalecido ante los retos que aún continúan en diversas partes del mundo.

Pamela Robledo Saucedo

estudiante de Máster en Diplomacia y
Organizaciones Internacionales



**Asociación para las
Naciones Unidas
en España**
United Nations Association of Spain

Referencias:

- Humans Rights Watch. World Report 2024.

Publicado por:



**Asociación para las
Naciones Unidas
en España**
United Nations Association of Spain

Con el apoyo de:



**Generalitat
de Catalunya**

ANUE no hace necesariamente como suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores.